

**Septuagésimo séptimo período de sesiones**

Tema 20 del programa provisional**

Globalización e interdependencia**Hacia un nuevo orden económico internacional****Informe del Secretario General***Resumen*

Este informe se presenta en cumplimiento de la resolución [75/225](#) de la Asamblea General. Ofrece un análisis actualizado de los principales obstáculos económicos a nivel internacional y las opciones para una recuperación más óptima y en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los países atraviesan el tercer año de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) en medio de la guerra en Ucrania, que ya lleva varios meses, y se enfrentan a una crisis climática cada vez mayor. Las economías continúan siendo frágiles, aunque estén mejor adaptadas a la transformación digital, pero la desigualdad, la pobreza y la degradación ambiental han aumentado y amenazan con retrasar el progreso hacia la consecución de los Objetivos.

El informe adopta una política con visión de futuro en el contexto del nuevo orden económico internacional. Incluye un examen del alcance y la profundidad del impacto inmediato y a largo plazo en las economías de los países, incluidas las dificultades financieras agravadas por la pandemia. También incluye un análisis de los efectos de las intervenciones fiscales y monetarias durante la pandemia y la forma en que han contribuido a crear una recuperación económica inclusiva y resiliente para avanzar en la consecución de los Objetivos y en la acción climática.

En el informe se analiza la manera en que la cooperación internacional y la acción nacional pueden ayudar a aprovechar todo el potencial de la transformación digital en curso, así como de los rápidos avances en ciencia, tecnología e innovación, en aras de un progreso equitativo y sostenible. Aunque en muchos países la guerra de Ucrania está provocando una crisis del costo de la vida que afecta de forma desproporcionada a los pobres, los elevados precios del petróleo y del gas también pueden acelerar la transición energética, que es esencial para una acción climática significativa.

* Publicado nuevamente por razones técnicas el 13 de septiembre de 2022.

** [A/77/150](#).



I. Introducción

1. Las ideas y propuestas para adopción de medidas sobre un nuevo orden económico internacional se establecieron en la Declaración sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional (resolución 3201 [S-VI] de la Asamblea General) y en el Programa de Acción sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional (resolución 3202 [S-VI]) en mayo de 1974. En la resolución [75/225](#), la Asamblea solicitó una reseña actualizada de los principales obstáculos económicos y en materia de políticas que dificultan a nivel internacional el logro del crecimiento económico sostenido y el desarrollo sostenible equitativos e incluyentes y del papel que cabía desempeñar a las Naciones Unidas para hacer frente a esos problemas, así como de los medios posibles para superar esos obstáculos.

2. Al igual que en los años setenta, cuando se adoptó la Declaración y se aprobó el Programa de Acción, la economía mundial atraviesa actualmente una serie de crisis que han tenido serias repercusiones económicas, especialmente en los países en desarrollo. Los países atraviesan el tercer año de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) en medio de la guerra en Ucrania, que ya lleva varios meses, y se enfrentan a una crisis climática cada vez mayor. En el marco de un acelerado cambio tecnológico, las ideas y propuestas del nuevo orden económico internacional han cobrado una nueva importancia. El contexto actual está marcado por las brechas en materia de tecnología y desarrollo que todavía persisten entre los países desarrollados y en desarrollo, los obstáculos de transferencia de tecnología e industrialización para los países en desarrollo y por el uso no sostenible de los recursos naturales.

3. La Declaración y el Programa de Acción, en los que los Estados Miembros se comprometieron a hacer frente a las desigualdades del sistema internacional, eliminar la brecha tecnológica y en el nivel de ingresos entre los países desarrollados y los países en desarrollo, procuran la aceleración constante del desarrollo económico y social, y garantizan la paz y la justicia para las generaciones presentes y futuras. En este informe se evaluará en qué medida las ideas y propuestas del nuevo orden económico internacional pueden contribuir a acabar con la pandemia de COVID-19, fomentar la recuperación económica inclusiva, acelerar la acción climática y aumentar la resiliencia, y, a la misma vez, aprovechar los beneficios de la digitalización y las nuevas tecnologías.

4. Desde la publicación del anterior informe sobre el nuevo orden económico internacional en 2020 ([A/75/325](#)), muchos países en desarrollo han experimentado un aumento de la desigualdad y la pobreza. Se prevé que la inseguridad alimentaria y el hambre, que ya se han acentuado en muchos países, empeoren aún más. El menor crecimiento económico, los grandes déficits presupuestarios y las limitaciones a las políticas fiscales expansivas pueden dar lugar a una disminución de la protección social y a una distribución del ingreso a favor de los grupos más ricos y, por lo tanto, poner en peligro el crecimiento económico inclusivo.

5. El presente informe está organizado de la siguiente manera: en la sección II se abordan los obstáculos de desarrollo a los que se enfrentan los países en desarrollo; en la sección III se analiza cómo la política fiscal y monetaria puede promover la acción climática; en la sección IV se hace hincapié en los desafíos y las oportunidades que presenta la transformación digital; y en la sección V se expone un análisis sobre la importancia de las ideas del nuevo orden económico internacional en el contexto actual y del papel que cabe desempeñar a las Naciones Unidas.

II. Desafíos de los países en desarrollo

Desigualdades subyacentes, pobreza y cambio climático

6. Actualmente, las tasas de desigualdad y pobreza se encuentran a niveles más elevados que en 2019 en muchos de los países en desarrollo. Alrededor del 60 % de la fuerza de trabajo mundial tiene ingresos más bajos que antes de la pandemia y, según el informe *World Inequality Report 2022*, la mitad más pobre de la población mundial posee solo el 2 % de la riqueza total del mundo, mientras que el 10 % más rico posee el 76 %¹. Se calcula que la pandemia llevó a unos 93 millones de personas a la pobreza extrema en 2021² y que otros 263 millones de personas caerán en la pobreza extrema en 2022, lo que supone que un total de 860 millones de personas viven en la pobreza extrema.

7. Los problemas de desarrollo, como la desigualdad, la pobreza, el subempleo y el acceso limitado a los servicios básicos, aumentan la vulnerabilidad ante los desastres naturales y limitan la capacidad de adaptación al cambio climático de las comunidades. El cambio climático es un factor clave en la escasez de alimentos y agua, en la inseguridad en los medios de subsistencia y en el trabajo informal, lo que puede aumentar la pobreza y la migración causada por el medio ambiente, tanto dentro como fuera de las fronteras³.

8. En los últimos 30 años, el número de personas que viven en zonas costeras vulnerables a la subida del nivel del mar ha aumentado de 160 a 260 millones, y el 90 % pertenece a países en desarrollo, incluidos los pequeños Estados insulares en desarrollo. La subida del nivel del mar ha incrementado el riesgo de inundaciones y crecidas en las zonas costeras, ha exacerbado la erosión y ha acelerado la intrusión de agua salina en ríos y acuíferos subterráneos, lo que ha deteriorado las infraestructuras, los ecosistemas y los medios de subsistencia⁴. A menos que la comunidad internacional adopte una postura más decidida con respecto al apoyo para reducir de manera rápida, inmediata y a gran escala las emisiones de gases de efecto invernadero, será imposible limitar el calentamiento global a 1,5 °C, o incluso a 2 °C.

9. El cambio climático también supone un riesgo para la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. Alrededor del 68 % de este tipo de empresas entrevistadas por el Centro de Comercio Internacional para estudios sobre la competitividad en África Subsahariana afirmaron que los riesgos para el medio ambiente afectaban de manera significativa sus negocios y capacidades financieras, cifra que escala al 93 % entre las empresas del sector primario. No obstante, solo el 38 % de las pequeñas y medianas empresas entrevistadas había invertido en medidas de adaptación al cambio climático, mientras que el 60 % de las grandes empresas había invertido en al menos una medida para reducir la exposición a los riesgos ambientales⁵.

¹ Lucas Chancel y otros, eds., *World Inequality Report 2022* (World Inequality Lab, 2022).

² *Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2022* (publicación de las Naciones Unidas, 2022).

³ Valérie Masson-Delmotte et al., eds., *Climate Change and Land: An IPCC Special Report on Climate Change, Desertification, Land Degradation, Sustainable Land Management, Food Security, and Greenhouse Gas Fluxes in Terrestrial Ecosystems* (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2019).

⁴ La información se encuentra en www.weforum.org/agenda/2021/06/climate-refugees-the-world-s-forgotten-victims/. Véase también: *Sustainable Development Outlook 2019: Gathering Storms and Silver linings* (publicación de las Naciones Unidas, 2019), “Climate change as a new driver of conflicts”, págs. 59 a 66.

⁵ *Financing for Sustainable Development Report 2022* (publicación de las Naciones Unidas, 2022).

10. La guerra en Ucrania puede socavar aún más la acción climática si los altos precios del petróleo y el gas incentivan un mayor uso del carbón a corto plazo y la inversión para una mayor capacidad de extracción de combustibles fósiles, en lugar de una transición a las energías renovables⁶. Asimismo, los subsidios y otras medidas para amortiguar el aumento del precio del combustible a corto plazo podrían resultar difíciles de revertir a largo plazo, lo que podría desacelerar la acción climática.

Fragilidad financiera y deuda

11. La pandemia puso a muchos países en riesgo de endeudamiento excesivo, limitó el margen fiscal y obstaculizó el crecimiento económico. Aunque hubo un cierto respiro económico en 2022, las nuevas variantes de la COVID-19 y la desigualdad en el acceso a las vacunas siguen perpetuando la pandemia. La imposibilidad de los países más pobres de obtener recursos suficientes y préstamos asequibles para inversión ha creado una brecha financiera y, como resultado, los países en desarrollo son incapaces de responder eficazmente a las crisis mediante la inversión en el desarrollo sostenible. Además, al expirar a finales de 2021 la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda, el Marco Común para el Tratamiento de la Deuda pasó a ser la principal fuente de alivio de la deuda, pese a su limitada adopción y a que pocos países reúnen los requisitos para acogerse a él.

12. El endurecimiento de las políticas monetarias de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América para desacelerar la inflación ha ocurrido más rápido de lo previsto y ha aumentado los costos del servicio de la deuda y provocado un mayor riesgo de endeudamiento excesivo. En promedio, los países desarrollados destinan el 3,5 % de los ingresos para pagar los intereses de su deuda, mientras que los países menos adelantados utilizan el 14 % de los ingresos. Se considera que, aproximadamente el 60 % de los países menos adelantados y otros países de ingreso bajo, corren un alto riesgo de incurrir en un endeudamiento excesivo o están sobreendeudados, lo cual duplica el 30 % registrado en 2015⁷.

13. Como demuestran los anteriores períodos de alta inflación, el aumento de las tasas de interés en los países desarrollados puede desencadenar salidas de capitales importantes y la depreciación de la moneda en los países en desarrollo, lo que genera una mayor inflación y afecta gravemente el gasto de los consumidores, la inversión, el empleo y el crecimiento económico. Las finanzas públicas también pueden verse afectadas y tener consecuencias adversas para la sostenibilidad de la deuda en general.

Reducción del margen normativo

14. Aunque las intervenciones fiscales a gran escala fueron esenciales para mitigar el endeudamiento excesivo durante la pandemia, han dejado a muchos Gobiernos con una enorme carga de la deuda, lo que genera inquietud sobre la sostenibilidad de la deuda pública en el futuro. A raíz de la reducción de los presupuestos fiscales, muchos Gobiernos de los países en desarrollo tienen dificultades para financiar inversiones muy necesarias en los sectores clave del desarrollo sostenible, la protección social, la sanidad, la educación, la infraestructura física y digital, la transición energética y el apoyo a la creación de empleo.

15. Durante la pandemia, los bancos centrales de los países en desarrollo introdujeron programas de compra de activos de menor escala y duración, en comparación con sus equivalentes en los países desarrollados. En 2020, 27 bancos

⁶ Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, “Monthly briefing on the world economic situation and prospects: rising inflation hits developing countries”, núm. 160, 3 de mayo de 2022.

⁷ *Financing for Sustainable Development Report 2022*.

centrales de países en desarrollo (10 de África, 9 de Asia y 8 de América Latina y el Caribe) emprendieron programas de compra de activos, pero la mayoría tuvo que interrumpir esta intervención en el segundo trimestre de 2021.

16. Las intervenciones se caracterizaron principalmente por sus considerables efectos indirectos positivos, como el aporte de liquidez y la reducción de la incertidumbre. Este fue el caso, en particular, de las regiones más desarrolladas con mayores niveles de independencia monetaria, estabilidad de los tipos de cambio y apertura financiera. Por el contrario, tras haber realizado gastos extraordinarios y haber adoptado una política monetaria flexible durante la pandemia, muchos países en desarrollo se enfrentan actualmente también a presiones inflacionarias, lo que ha reducido aún más el margen normativo necesario para la recuperación económica.

17. El aumento de la inflación añade más presión para poner fin a los programas de compra de activos, pero mientras los bancos centrales realizan este ajuste, también deben soportar las perturbaciones de los mercados financieros y la desestabilización de los flujos financieros mundiales. Los errores de política, como retirar el estímulo demasiado rápido o retrasar por mucho tiempo el endurecimiento de las políticas monetarias, pueden exacerbar aún más los problemas económicos.

Interrupciones comerciales y presiones inflacionarias

18. La pandemia provocó un aumento del consumo de bienes en lugar de servicios, lo que puso a prueba la capacidad de producción y los canales de distribución, y provocó una escasez de suministros. Los efectos de la pandemia y las medidas de contención conexas pusieron presión en las cadenas globales de valor, mientras que la producción de insumos intermedios clave en la fabricación (por ejemplo, microchips) no estuvo a la altura de la creciente demanda de vehículos y bienes de consumo. La guerra en Ucrania ha exacerbado aún más las interrupciones de la cadena de suministro, además de contribuir a la volatilidad de los mercados financieros internacionales y al aumento de los precios de la energía y los alimentos. Mientras la pandemia continúa, el confinamiento y las interrupciones en los centros de fabricación y las ciudades portuarias podrían agravar y empeorar la escasez de suministros.

19. En África, Asia Occidental y América Latina y el Caribe, las tasas de inflación han alcanzado los dos dígitos en 2022. Mientras tanto, la inflación en Asia Meridional se ha mantenido relativamente estable, aunque en un nivel elevado. Claramente, el aumento de la inflación no se limita a los precios de la energía y los alimentos ni a las grandes economías en desarrollo, sino que también afecta a otros países en desarrollo, como Angola, Burundi, Etiopía, Mongolia y Sri Lanka⁸.

20. Los países que se encuentran más integrados en los mercados financieros mundiales, como Chile, México y Sudáfrica, empezaron a subir las tasas de interés, incluso antes de que la Reserva Federal de los Estados Unidos las aumentara, para evitar posibles salidas de capital y la depreciación de la moneda nacional. El nuevo incremento de las tasas de interés, incluso en otros países, está vinculado a las medidas para contener la inflación. Desde el segundo semestre de 2021, el endurecimiento de las políticas monetarias en los países en desarrollo se ha acelerado. Entre enero y abril de 2022, al menos 27 bancos centrales aumentaron las tasas de interés, incluso en América Latina (Argentina, Chile, Perú y Uruguay) y África (Egipto y Sudáfrica).

21. El aumento de las tasas de interés para disminuir la inflación puede hacer descarrilar la recuperación económica y empeorar las perspectivas de empleo, así

⁸ Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, "Monthly briefing on the world economic situation and prospects: rising inflation hits developing countries", núm. 160.

como también limitar el margen fiscal para los programas de apoyo social e incrementar los riesgos de sostenibilidad de la deuda. Los países importadores netos de petróleo y alimentos corren un mayor riesgo de que se intensifiquen las presiones sobre sus balanzas de pagos y situaciones fiscales. En este contexto, los bancos centrales se enfrentan a complejas disyuntivas de política: por un lado, intentar contener la inflación y preservar la estabilidad financiera y, por otro, apoyar la recuperación económica. Las políticas fiscales y monetarias nacionales deben calibrarse cuidadosamente ante el endurecimiento de las condiciones económicas mundiales.

Exposición a una crisis del costo de la vida

22. Es probable que la disminución de los ingresos reales a causa de la inflación aumente los niveles de pobreza, sobre todo porque en muchos países en desarrollo el margen fiscal para mitigar el impacto de la suba de los precios de los alimentos y el combustible es limitado. La suba de los precios de los alimentos y el combustible podrían empujar a millones de personas a la pobreza y exacerbar aún más la desigualdad, ya que los hogares pobres gastan una proporción muy superior de sus ingresos en estos productos básicos.

23. El aumento de la inflación podría agravar la inseguridad alimentaria en muchos países en desarrollo que siguen luchando contra las consecuencias económicas que ha provocado la pandemia. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) estima que el número de personas que sufren inseguridad alimentaria se duplicó de 135 millones antes de la pandemia a 276 millones a finales de 2021. Sin embargo, los efectos de la guerra en Ucrania podrían incrementar esta cifra a 323 millones en 2022⁹. Si en la próxima temporada de cultivo se produce un déficit en la producción por falta de fertilizantes o por condiciones meteorológicas extremas en las regiones productoras de alimentos, la disminución de la disponibilidad de alimentos a nivel mundial podría afianzar aún más la inseguridad alimentaria.

24. Mientras que una de cada dos personas en los países de África Subsahariana está expuesta a elementos de la crisis del costo de la vida (por ejemplo, alimentos, energía y finanzas), 20 países de América Latina y el Caribe se vieron profundamente afectados¹⁰. La pobreza extrema amenaza a 2,8 millones de personas en la región de Oriente Medio y Norte de África. Los habitantes de Asia Meridional han venido padeciendo olas de calor agobiantes en 2022, y 500 millones de ellos están gravemente expuestos a la crisis alimentaria y financiera. Dada la importancia de las importaciones de energía y las remesas de Rusia, los países de Europa Oriental y Asia Central también están expuestos a la crisis energética y financiera.

25. Muchos países de África y América Latina y el Caribe registran actualmente tasas de desempleo y subempleo más elevadas que antes de la pandemia¹¹.

26. En las actuales condiciones inflacionarias, el crecimiento económico y la creación de empleo también dependen de si los países son exportadores o importadores netos de productos básicos. Para los países exportadores de productos básicos, los beneficios del aumento de los precios pueden impulsar el crecimiento y el empleo, aunque posiblemente a costa de un incremento de las desigualdades debido al deterioro de los salarios reales. Por el contrario, las perturbaciones comerciales y

⁹ Bárbara Celis, “Hunger, famine and starvation: 750,000 people are in the front line, UN study says”, PMA, 6 de junio de 2022.

¹⁰ Grupo de Respuesta a la Crisis Global sobre Alimentación, Energía y Finanzas, “Global impact of the war in Ukraine: billion of people face the greatest cost-of-living crisis in a generation”, informe de políticas, núm. 2 (8 de junio de 2022).

¹¹ Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, “Monthly briefing on the world economic situation and prospects”, núm. 160.

de precios en los países que dependen de las importaciones de alimentos y combustible tendrían consecuencias negativas en el crecimiento, el empleo, la reducción de la pobreza y el margen fiscal.

III. Políticas fiscales y monetarias para promover la acción climática

27. Las políticas fiscales y monetarias son herramientas importantes que influyen directamente en la dirección de los agregados macroeconómicos y las pautas de desarrollo económico. También han tenido profundas repercusiones en el medio ambiente. La bibliografía académica sugiere que tanto las políticas fiscales como las monetarias pueden tener resultados significativos para el medio ambiente, en función de si tienen por objeto apoyar o no proyectos ecológicos. Por ejemplo, estas políticas pueden acelerar o ralentizar la transición energética de la economía mundial hacia vías más sostenibles.

28. También han resultado útiles otros instrumentos normativos, como las normas para reducir las emisiones mediante la fijación de precios del carbono, los incentivos para invertir en el desarrollo y la puesta en marcha de tecnologías verdes y el establecimiento de garantías contra el riesgo excesivo. Cuando los Gobiernos intervienen para internalizar los precios del carbono y alterar los incentivos de las empresas y los consumidores, la estructura de la economía puede cambiar. De hecho, las intervenciones fiscales para incentivar la transición del sector energético hacia fuentes de energía más limpias o para desalentar el uso de combustibles fósiles (por ejemplo, a través de impuestos sobre el carbono o de subvenciones específicas y con una duración limitada) pueden reducir las emisiones de carbono y mejorar el medio ambiente. Un estudio sobre la industria del taxi en Beijing demostró que mediante una combinación de impuestos sobre el carbono y subsidios vinculados a la mejora de las normas de emisión y los precios del comercio de derechos de emisión de carbono, se redujeron las emisiones de carbono¹².

29. En términos más generales, para limitar el calentamiento global a 2 °C o menos, los países con mayores emisiones tendrían que introducir un impuesto sobre el carbono que se elevaría a 75 dólares por tonelada en 2030. En la actualidad, unos 50 países cuentan con algún tipo de sistema de fijación de precios del carbono, en los que la media mundial del impuesto sobre el carbono es de 2 dólares por tonelada, lo que está muy por debajo de lo que necesita el planeta. En Suecia, el impuesto sobre el carbono es de 127 dólares por tonelada y las emisiones se han reducido un 25 % desde 1995, mientras que la economía ha crecido un 75 %. Para que los impuestos sobre el carbono sean políticamente más viables y eficaces desde el punto de vista económico, los ingresos derivados que representan entre el 0,5 % y el 4,5 % del producto interno bruto (PIB), según el país, podrían utilizarse para reducir otros impuestos, como los que gravan los ingresos o la nómina de sueldos. Los ingresos también podrían servir para apoyar a los trabajadores y las comunidades afectadas (por ejemplo, en las zonas de extracción de carbón) o transferirse directamente como dividendos a la población siguiendo una escala móvil basada en los ingresos. También podrían realizarse inversiones adicionales para promover la consecución de los Objetivos, fomentar la innovación o acelerar la transformación digital, lo cual impulsaría el crecimiento a largo plazo¹³.

¹² Yang Liu y otros, “A competitive carbon emissions scheme with hybrid fiscal incentives: the evidence from a taxi industry”, *Energy Policy*, vol. 102 (marzo de 2017), págs. 414 a 422.

¹³ Vitor Gaspar y otros, “Fiscal policies to curb climate change”, *IMFBlog* (10 de octubre de 2019).

30. Del mismo modo, las políticas monetarias expansivas pueden apoyar las políticas fiscales mediante préstamos para promover tecnologías energéticamente eficientes y renovables¹⁴. Los bancos centrales pueden desempeñar un papel proactivo para abordar los desafíos del desarrollo sostenible, como el cambio climático y la desigualdad. De hecho, varios bancos centrales y reguladores financieros han reconocido la necesidad de responder a los riesgos no económicos y otras cuestiones relativas a la sostenibilidad. En Asia y el Pacífico, el 94 % de los bancos centrales encuestados consideraban que debían desempeñar una función en la promoción de la financiación verde y de las iniciativas de financiación de actividades con bajas emisiones de carbono (A/75/325).

31. La política monetaria, con el respaldo de la política fiscal y las normas, puede contribuir a reducir los costos de transacción para las empresas que invierten en la reducción de emisiones, facilitando así el camino de las economías hacia la neutralidad en emisiones de carbono y generando efectos positivos duraderos. Del mismo modo, los bancos centrales pueden tener un impacto duradero durante el período de transición mediante el apoyo a las prácticas de divulgación en los mercados financieros si someten determinados valores y activos financieros de sus operaciones de política monetaria a requisitos específicos de divulgación y normas de información, como se ha hecho, por ejemplo, en la taxonomía de la Unión Europea para las actividades sostenibles y en las prácticas fomentadas por el Grupo de Trabajo sobre Divulgación Financiera relacionada con el Clima. Por lo tanto, los bancos centrales pueden desempeñar un papel catalizador en los mercados financieros si toman medidas para reforzar la resiliencia del sistema financiero.

32. Los bancos centrales también pueden desempeñar una función en la elaboración de regulación financiera para ayudar a los inversores que busquen opciones de inversión sostenibles, por ejemplo estableciendo normas mínimas para comercializar como sostenibles los productos de inversión (véase A/75/268, párr. 55). A este respecto cabe señalar la taxonomía de la Unión Europea sobre actividades sostenibles, aprobada por el Parlamento Europeo en junio de 2020, que establece criterios detallados para determinar qué constituye una actividad económica sostenible (A/75/325, párr. 27). Los programas de compra de activos, en caso de que se reanuden, también podrían incorporar consideraciones ecológicas en su elección de activos.

33. A fin de incrementar la eficacia de los bancos nacionales y multilaterales de desarrollo, los bancos centrales pueden crear un entorno propicio para que fluya la financiación privada hacia proyectos que promuevan el desarrollo sostenible, como proyectos relacionados con la infraestructura física y la energía renovable. En un gran número de países, la supervisión y la regulación de los bancos nacionales de desarrollo son competencia de la misma institución responsable de los bancos comerciales privados, a saber, el banco central o un organismo de supervisión bancaria.

34. Aunque el cambio climático puede acentuar las desigualdades, algunos instrumentos específicos de política monetaria pueden contribuir a reducirlas. Los programas de refinanciación, como las opciones de refinanciación a largo plazo que el Banco Central Europeo puso en marcha, pueden estar condicionados a los préstamos bancarios que benefician a los hogares más vulnerables. Asimismo, las operaciones de refinanciación a más largo plazo especifican que la suma que los bancos pueden tomar prestada debe estar vinculada a la suma de dinero que prestan a las sociedades no financieras y a los hogares, lo que garantiza que la expansión

¹⁴ Haider Mahmood y otros, "The fiscal and monetary policies and environment in GCC countries: analysis of territory and consumption-based CO2 emissions", *Sustainability*, vol. 14, núm. 3 (21 de enero de 2022), pág. 1225.

monetaria llegue a la economía real y, por lo tanto, tenga un efecto distributivo progresivo. En 2020, la Reserva Federal de los Estados Unidos creó un programa de préstamos directos a los gobiernos estatales y municipales mediante mecanismos de liquidez municipales. En respuesta a la crisis de la COVID-19, la Reserva Federal también amplió su principal programa de préstamos “directos” para apoyar a organizaciones sin fines de lucro, como hospitales, escuelas y organizaciones de servicios sociales, que gozaban de una situación financiera sólida antes de la pandemia¹⁵.

35. No obstante, la capacidad de actuar rápidamente y los balances potencialmente ilimitados de los bancos centrales pueden provocar una dependencia excesiva de las intervenciones monetarias para impulsar los objetivos de desarrollo sostenible. Es importante destacar que las políticas fiscales pueden generar incentivos más fuertes y específicos para influir en las decisiones económicas a largo plazo, y la infratilización de esos instrumentos normativos podría resultar perjudicial para la estrategia general de políticas de un país. Además, un exceso de presión en los mandatos de los bancos centrales puede socavar su credibilidad, en particular si se solapan los mandatos o no están claras las responsabilidades en relación con otros organismos públicos.

36. En la actualidad, existe la posibilidad de encarar las cuestiones mencionadas anteriormente mediante la coordinación de políticas fiscales y monetarias apropiadas, inversiones específicas y cooperación internacional, con el fin de acelerar la transición hacia la sostenibilidad al tiempo que se minimizan sus costos. Cuando procedan a retirar los programas de compra de activos, los bancos centrales podrán optar por retener los activos de sectores y empresas cuya huella de carbono sea inferior, a la vez que elaboran nuevos principios y directrices para dar prioridad a los activos con bajas emisiones de carbono en futuros programas.

37. En general, tanto las políticas monetarias como las fiscales deben coordinarse y aplicarse simultáneamente para mantener la estabilidad macroeconómica y, al mismo tiempo, proporcionar el estímulo adecuado para acelerar la acción climática, incluso conseguir que la población apoye esta acción. La coordinación ha cobrado mayor importancia en el contexto económico actual debido a las limitaciones del alcance y de la magnitud de estas políticas.

38. Una serie de políticas amplias que incluyan instrumentos de política fiscal, monetaria y estructural serían más eficaces para afrontar los desafíos del cambio climático. Para que esto ocurra a nivel mundial, se requiere una coordinación multilateral de las políticas climáticas y medidas de políticas nacionales estables para garantizar una transición ordenada.

¹⁵ Salvador Pérez-Moreno, Natalia Martín-Fuentes y Juan-Francisco Albert, “Rethinking monetary policy in the framework of inclusive and sustainable growth”, en *Economic Policies for Sustainability and Resilience*, Philip Arestis y Malcolm Sawyer, eds. (Cham, Suiza, Palgrave Macmillan, 2022).

IV. Aprovechar los rápidos avances tecnológicos

Transformación económica estructural

39. Según las mediciones del uso global del ancho de banda de Internet, los flujos de datos mundiales han seguido aumentando a un ritmo acelerado. Aumentaron un 35 % en 2020, hasta los 230 exabytes mensuales, y se espera que se tripliquen con creces en 2026, hasta los 780 exabytes¹⁶. Esta mayor dependencia de la conectividad digital no solo pone de relieve las desigualdades en el acceso a las tecnologías digitales entre países y regiones, sino que también plantea nuevos desafíos en materia de políticas. El uso de las tecnologías digitales se aceleró aún más durante la pandemia de COVID-19. El trabajo a distancia y las reuniones digitales se han convertido en la nueva norma, al tiempo que las actividades económicas han aumentado en diversas plataformas digitales. Cada vez más, las organizaciones públicas y privadas adoptan la modalidad de trabajo a distancia como la norma para todos o algunos de sus empleados.

40. Las innovaciones financieras digitales reducen las fricciones del mercado y los costos de transacción, lo que hace rentable la prestación de servicios financieros a microempresas y pequeñas y medianas empresas antes excluidas. Los servicios del sector tecnofinanciero, y en particular los servicios de dinero móvil, han contribuido a un rápido aumento de la titularidad de cuentas, incluso por parte de las mujeres. Durante la pandemia de COVID-19, los servicios financieros digitales representaron una salvación para muchas personas y empresas. Los Gobiernos también utilizaron los servicios financieros digitales para enviar amplias transferencias a los particulares. La nueva modalidad de pagos digitales, como los pagos instantáneos y el dinero electrónico, también siguió creciendo durante la pandemia de COVID-19. La proporción de “nuevos métodos de pagos” (pagos instantáneos y pagos con dinero electrónico) siguió aumentando, en detrimento de los métodos de pago tradicionales que no son con efectivo, como los cheques, las transferencias de débito directo, las transferencias de crédito y las transferencias con tarjeta. Asimismo, el número de cuentas de dinero móvil registradas en todo el mundo aumentó un 13 % en 2020, hasta los 1.200 millones, lo que trajo aparejado un incremento del 22 % en el valor de las transacciones, hasta los 767.000 millones de dólares.

Acceso desigual entre países y dentro de ellos

41. Aunque las tecnologías digitales pueden mejorar la eficiencia y aumentar la inclusión, también pueden acentuar las desigualdades entre los países y dentro de ellos y crear otros riesgos. La rápida digitalización ha incrementado enormemente el costo de la exclusión para aquellos que no tienen acceso o no pueden pagar para utilizar estas tecnologías. Muchos países en desarrollo, especialmente los menos adelantados, también corren el riesgo de quedar rezagados y convertirse principalmente en usuarios y proveedores de datos, en vez de participar de forma productiva en la cadena de valor digital a nivel mundial.

42. Según los últimos datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, 4.900 millones de personas, es decir, el 63 % de la población mundial, utilizaban Internet en 2021, frente a los 4.100 millones (54 %) de 2019. La mayor parte de este aumento fue impulsada por los nuevos usuarios de Internet en los países de ingresos medianos. En los países menos adelantados, el porcentaje de personas que utilizan Internet sigue siendo bajo, un 27 %, en comparación con el 57 % en los países en desarrollo en general, y el 90 % en los países desarrollados.

¹⁶ Un exabyte equivale a 10¹⁸ bytes.

43. Incluso cuando existe cobertura de banda ancha, el costo del acceso sigue siendo un obstáculo, especialmente en los países menos adelantados. El precio medio mensual de la suscripción de banda ancha más barata con al menos 5 GB de datos en los países menos adelantados es de 22,3 dólares, es decir, algo más del 20 % ingreso nacional bruto per cápita. Esta cifra se compara con la mediana mundial de 22,8 dólares, o el 2,8% del ingreso nacional bruto per cápita. El costo de los dispositivos digitales también es prohibitivo para segmentos importantes de la población de los grupos de menores ingresos en muchos países en desarrollo. Casi 2.500 millones de personas viven en países en los que el costo del teléfono inteligente más barato disponible equivale al 25 % o más del ingreso medio mensual. Esta falta de asequibilidad es una de las principales razones de la brecha de uso de Internet móvil, ya que unos 3.400 millones de personas no utilizan Internet móvil a pesar de vivir en zonas con cobertura.

44. También existen diferencias entre los grupos poblacionales, sobre todo en función del género. En 2020, el 57 % de las mujeres utilizaron Internet, lo que supone 5 puntos porcentuales menos que los hombres. Mientras que la paridad de género en el uso de Internet casi se ha alcanzado en los países desarrollados y en los pequeños Estados insulares en desarrollo, siguen existiendo grandes diferencias en algunos de los países menos adelantados y en los países en desarrollo sin litoral. Entre las regiones geográficas, las mayores diferencias se dan en África (11 puntos porcentuales) y en los Estados Árabes (12 puntos porcentuales)¹⁷.

45. La Organización Internacional del Trabajo sostiene que suelen ser los empleados de los ingresos más altos quienes que pueden trabajar a distancia. En general, preocupa que una economía digital agrave las desigualdades entre los países que están a la vanguardia tecnológica y los países menos adelantados tecnológicamente, así como dentro de los países. En los países de ingreso alto, solo el 27 % de los trabajadores podían trabajar a distancia en 2020. También preocupa que las tecnologías digitales ejerzan una presión a la baja en los salarios de los trabajadores con cualificaciones medias y bajas a medida que sus tareas sean realizadas cada vez más por aplicaciones informáticas, mejoras tecnológicas y modelos. Sin embargo, esas tendencias también pueden crear oportunidades para formular políticas con miras a coordinar los esfuerzos realizados en los planos nacional y mundial para impulsar el empleo decente y fomentar una recuperación resiliente y sostenible.

46. Otros riesgos a nivel individual e institucional incluyen la creciente amenaza de los incidentes de ciberseguridad y el fraude digital, así como nuevas formas de exclusión, por ejemplo, a través de sesgos en la toma de decisiones basadas en algoritmos. A nivel de mercado, la digitalización se ha asociado a una mayor concentración del poder de mercado debido al auge de las grandes plataformas tecnológicas internacionales. El crecimiento de los servicios financieros digitales también ha suscitado preocupaciones por la estabilidad e integridad financieras.

Cierre de las brechas digitales

47. La erradicación de estas brechas requerirá políticas como la inversión en infraestructura digital, la promoción del acceso universal a Internet a precios asequibles y el desarrollo de competencias digitales. La protección del derecho a la privacidad, el refuerzo del uso responsable de la inteligencia artificial y la lucha contra la ciberdelincuencia también pueden contribuir a un espacio digital más seguro para todos. Las políticas más orientadas hacia grupos concretos, como las mujeres y las niñas, pueden apoyar una mayor participación en el desarrollo tecnológico y la creación de contenidos.

¹⁷ *Financing for Sustainable Development Report 2022.*

48. Los reguladores y supervisores pueden recurrir a la tecnología financiera para apoyar la inclusión financiera y, al mismo tiempo, hacer frente a los crecientes riesgos derivados de los incidentes de ciberseguridad y el fraude digital, reforzando la protección de los consumidores y asignando a los proveedores de servicios financieros responsabilidades relacionadas con la protección de los datos. Los fondos de servicio y acceso universales bien gestionados pueden ayudar a movilizar los recursos necesarios para lograr el acceso universal a Internet de banda ancha, a partir de las contribuciones del sector privado, que pueden unirse a los fondos públicos cuando sea necesario. Para solucionar los problemas relacionados con los derechos humanos, la discriminación, la obligación de rendir cuentas sobre los contenidos y la gobernanza de datos, incluso evitar la concentración del poder de mercado, es imperativo revisar y reforzar los marcos reguladores en los contextos en que se estime necesario. Para lograr la coherencia y equidad de las normas a nivel mundial, será necesario contar con una coordinación a nivel internacional.

49. A medida que la educación en línea se convierte en un complemento, o incluso en un sustituto, de la educación tradicional en el aula, deben hacerse esfuerzos para promover la inclusión. Los centros educativos públicos deben garantizar que un mayor número de alumnos pueda beneficiarse de las nuevas tecnologías, al tiempo que hay que mejorar el acceso y la calidad de las herramientas de aprendizaje a distancia. Esto puede hacerse dando prioridad al acceso a Internet de banda ancha y a los dispositivos digitales, e incluyendo a todos los estudiantes en las estrategias de aprendizaje a distancia. Las medidas focalizadas, como la prestación de apoyo específico a las personas con discapacidad, el diseño de materiales de aprendizaje en lenguas minoritarias y los esfuerzos centrados en garantizar que el aprendizaje a distancia y en línea sea más accesible para los niños migrantes y desplazados, pueden fomentar la inclusión. Además, los profesores necesitan formación especializada en competencias digitales y apoyo técnico para aplicar y evaluar eficazmente el impacto del aprendizaje a distancia y en línea.

50. El apoyo adicional del lado de la demanda para facilitar una mayor adopción y uso de Internet de banda ancha podría provenir tanto de fuentes privadas como públicas. Las empresas privadas y los particulares pueden ser los principales impulsores de contenidos y aplicaciones, como el análisis de datos, las aplicaciones de inteligencia artificial o los contenidos multimedia que hacen atractivo el uso de Internet de banda ancha. El sector público puede apoyar la demanda proporcionando servicios públicos digitales, mientras que los responsables de formular políticas pueden apoyar la innovación local y la creación de contenidos, por ejemplo, a través de incubadoras y centros de innovación. También es necesario el apoyo público para reforzar las competencias digitales y facilitar una mayor participación de las microempresas y pequeñas y medianas empresas en la economía digital.

Experiencias de los países y marcos de apoyo

51. Para apoyar la transición digital inclusiva de las economías y las sociedades, varios países de Asia Sudoriental han aplicado una serie de medidas políticas destinadas a mejorar la alfabetización digital de sus ciudadanos y las competencias digitales de su fuerza de trabajo. Por ejemplo, Indonesia ha dado prioridad a las competencias y la alfabetización digitales como tema clave para la presidencia del país en el Grupo de los 20 (G20) en 2022. A nivel nacional, el Gobierno de Indonesia está impulsando un movimiento nacional para el programa de alfabetización digital en habilidades cibernéticas con el fin de enseñar habilidades digitales básicas a unos 12,5 millones de participantes, así como un programa de becas de talento digital para competencias digitales de nivel medio y avanzado (con 100.000 y 300 participantes, respectivamente). En Tailandia, a principios de 2021, el Ministerio de Trabajo puso en marcha la Academia de Desarrollo de Competencias Digitales, que supervisa el

desarrollo de las competencias digitales de la fuerza de trabajo y ejecuta programas y cursos de formación en competencias digitales para los jóvenes. Camboya pretende superar los bajos niveles de alfabetización digital, que han impedido a las mujeres microempresarias acceder a la financiación y ampliar sus negocios. Recientemente, la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico, el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización y SHE Investments pusieron en funcionamiento la aplicación de contabilidad KOTRA Riel para crear una experiencia sencilla y fácil de usar que ayude a los microempresarios camboyanos a planificar y gestionar los flujos de efectivo y a acceder a los servicios financieros formales.

52. Como propuso el Secretario General en su informe titulado “Nuestra Agenda Común” (A/75/982), un Pacto Digital Global público-privado puede abordar cuestiones relativas a la conectividad universal, la gobernanza de datos, los criterios de responsabilización de los contenidos, la discriminación y la protección de los derechos humanos.

53. Los responsables de formular políticas y los reguladores también pueden establecer marcos de apoyo y requisitos para una cobertura de banda ancha universal e inclusiva, al tiempo que permiten la innovación. Las obligaciones de servicio universal se han utilizado durante mucho tiempo para imponer a los operadores de redes el requisito de ampliar la cobertura de las telecomunicaciones a las poblaciones vulnerables y de difícil acceso. Aunque las obligaciones de servicio universal se han vuelto menos comunes en los últimos años, los Gobiernos podrían imponerlas a cambio del acceso a un espectro de gran demanda en el despliegue universal de la banda ancha de cuarta (4G) y quinta generación (5G), especialmente cuando los operadores tienen un poder de mercado significativo. Otros requisitos reglamentarios podrían ser los regímenes de acceso abierto y el uso compartido de infraestructura. Las autoridades también pueden establecer incentivos no financieros para la inversión privada, por ejemplo, mediante la simplificación de los procedimientos y los procesos de aprobación; el acceso a la cartografía de la infraestructura local y a la información geográfica; y los marcos de las transacciones electrónicas, la ciberseguridad, los derechos de autor y la privacidad. Los entornos reglamentarios controlados para la aplicación de normas pueden ayudar a estimular la innovación al proporcionar un espacio seguro para que las empresas formulen y prueben nuevos conceptos y productos a escala limitada.

Cooperación internacional para promover una transformación económica digital equitativa

54. Es necesario redoblar esfuerzos, a nivel nacional e internacional, a fin de aprovechar esas tecnologías y movilizar la financiación y la creación de capacidades necesarias para lograr una transformación económica digital equitativa¹⁸. También es necesaria una mayor cooperación en ámbitos como la fiscalización y la reglamentación.

55. Como resultado de las economías de escala y de la naturaleza de plataforma de las tecnologías digitales, un número relativamente pequeño de empresas desempeña un papel desproporcionadamente grande. Estas empresas suelen controlar la recogida, el tratamiento y la comercialización de los datos, que son la principal fuente de ingresos y beneficios. Sin embargo, los países en desarrollo ven con preocupación que los datos generados en actividades llevadas a cabo dentro de sus jurisdicciones sean a menudo recogidos por empresas con sede en otra jurisdicción, lo que tiene implicaciones para la recaudación de impuestos y la seguridad nacional (A/75/325, párr. 44).

¹⁸ *Ibid.*

56. Son esenciales un marco de cooperación internacional más inclusivo y una mayor transparencia de las empresas para reforzar y mejorar los sistemas de impuestos sobre sociedades. La Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, cuyo objeto es lograr una discusión más amplia e inclusiva sobre las normas impositivas internacionales, sugiere que los Gobiernos responsables deben introducir impuestos progresivos sobre los servicios digitales aplicables a las rentas económicas generadas por las empresas multinacionales del sector. La progresividad de los impuestos también significaría tasas impositivas más bajas para las micro, pequeñas y medianas empresas digitales, cuyos beneficios suelen ser menores.

57. De forma análoga a los impuestos sobre los beneficios extraordinarios propuestos para las empresas petroleras que se benefician de los altos precios como consecuencia de la guerra en Ucrania, también se ha sugerido gravar los beneficios extraordinarios obtenidos por las gigantescas empresas digitales durante la pandemia, y que los ingresos se utilicen para financiar los costos públicos y privados de la pandemia e invertir en la creación de resiliencia. Dado que las operaciones de las empresas digitales son globales, la cooperación internacional será esencial para recaudar de forma efectiva impuestos de ese tipo.

Ciencia, tecnología e innovación

58. Aparte de las tecnologías digitales, los rápidos, y sin embargo desiguales, avances en la ciencia, la tecnología y la innovación conllevan el riesgo de crear brechas prácticamente insuperables entre los países en cuanto a sus perspectivas futuras para el avance del bienestar humano. Por lo tanto, es necesaria una mayor cooperación internacional.

59. Por ejemplo, la cooperación internacional a través del intercambio de información y tecnologías sobre la detección, la prevención y el tratamiento de la COVID-19 ha sido necesaria para controlar la pandemia en todos los países. Esto ha incluido iniciativas como el Acelerador del Acceso a las Herramientas contra la COVID-19 (ACT-A), el Mecanismo COVAX para el Acceso Mundial a las Vacunas contra la COVID-19, el Fideicomiso para la Adquisición de Vacunas en África y las pertinentes peticiones de promesas de contribuciones. El mecanismo de Acceso Mancomunado a las Tecnologías contra la COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud permite a los creadores de productos terapéuticos, diagnósticos, vacunas y otros productos sanitarios relativos a la COVID-19 otorgar licencias de su propiedad intelectual, conocimientos y datos con fabricantes de calidad garantizada. A través de licencias voluntarias, no exclusivas y transparentes, el mecanismo de Acceso Mancomunado a las Tecnologías puede facilitar el aumento de la producción mediante el uso de múltiples fabricantes que actualmente tienen capacidad sin explotar. Otras iniciativas incluyen la provisión de acceso a la información del sistema de patentes, como el servicio de búsqueda relativo a la COVID-19 en el portal PatentScope de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Iniciativa por un Banco de Patentes de Medicamentos, que contiene información sobre los medicamentos en los ensayos sobre la COVID-19 y las vacunas. Para facilitar el acceso a los tratamientos médicos y a las tecnologías sanitarias a los países de ingresos bajos y medios, la Iniciativa celebró acuerdos de licencia para dos tratamientos antivirales orales experimentales contra la COVID-19 y una prueba diagnóstica serológica de anticuerpos contra esta enfermedad, que pueden administrarse de forma no exclusiva y libre de derechos, según los acuerdos suscritos¹⁹.

¹⁹ *Ibid.*

60. El sistema de las Naciones Unidas está trabajando para reforzar la capacidad de los países en materia de ciencia, tecnología e innovación, complementando esfuerzos bilaterales y multilaterales. El Mecanismo de Facilitación de la Tecnología y el Banco de Tecnología para los Países Menos Adelantados están facilitando el diálogo en materia de las políticas y la transferencia de tecnología, incluso mediante el aprovechamiento de las tecnologías digitales para el desarrollo. Las entidades de las Naciones Unidas sumaron fuerzas a las de otros asociados a través del Acelerador del Acceso a las Herramientas contra la COVID-19 (ACT-A), que ha entregado más de 1.000 millones de dosis de vacunas a los países en desarrollo, pero que aún no dispone de fondos suficientes. La colaboración a varios niveles también se propone contribuir con los esfuerzos nacionales a fin de alinear la financiación, la inversión y el empleo de la tecnología para lograr una mejor recuperación ante la crisis actual. Se realiza un llamamiento a los Estados Miembros para que incrementen sus contribuciones al Acelerador ACT y consideren la posibilidad de compartir los conocimientos técnicos y la propiedad intelectual, a fin de apoyar la lucha contra la COVID-19 y reforzar la resiliencia ante futuras pandemias. Es necesario continuar apoyando el Mecanismo de Facilitación de la Tecnología y el Banco de Tecnología para los Países Menos Adelantados, con el fin de ayudarlos a que cumplan sus mandatos y de reforzar aún más la capacidad de los países en desarrollo para aprovechar la ciencia, la tecnología y la innovación, por ejemplo, mediante el Programa Piloto Mundial de Hojas de Ruta de Ciencia, Tecnología e Innovación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (hojas de ruta de CTI para los ODS)²⁰.

Desarrollo sostenible

61. En su informe titulado “Nuestra Agenda Común”, el Secretario General pedía un nuevo pacto global para lograr una forma de multilateralismo más interconectada, inclusiva y eficaz, que se centre en la previsión estratégica para hacer frente a los principales riesgos globales. Los países desarrollados deben cumplir su compromiso de movilizar 100.000 millones de dólares anuales para la acción climática en los países en desarrollo. Los proveedores deben cumplir con duplicar la financiación para la adaptación para el 2025 y dar prioridad a la financiación a los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo. Los asociados para el desarrollo deben integrar las medidas de reducción del riesgo de desastres en la cooperación para el desarrollo en todos los sectores con el fin de aumentar la resiliencia contra las crisis y los peligros actuales y futuros.

62. Las recientes innovaciones tecnológicas posibilitan la transición energética, con mejoras en la producción de energía sostenible y el uso final, incluso a través de las tecnologías orientadas a los consumidores digitales. No obstante, aunque se han reforzado los compromisos políticos, las inversiones en la esfera de la energía sostenible continúan siendo insuficientes. Las inversiones en energía han disminuido en muchos países en desarrollo y se ha reducido la transferencia de tecnologías limpias. Los encargados de formular políticas deben plantearse objetivos más ambiciosos en relación con el clima y mantener sus compromisos, por ejemplo, aprovechando las medidas de estímulo fiscal que permitan una recuperación sostenible de la crisis de COVID-19. La inversión privada puede ser una gran fuente de financiación de la infraestructura energética, mientras que el sector público puede establecer incentivos y ayudar a que las comunidades remotas y subatendidas gocen del acceso universal y asequible a la energía. Los esfuerzos para aumentar la eficiencia energética, incluso a través de las tecnologías digitales, pueden disminuir las necesidades generales de inversión y ayudar a reducir el grado de dependencia de soluciones tecnológicas no probadas que supuestamente reducen o eliminan las

²⁰ *Ibid.*

emisiones de gases de efecto invernadero. Será necesaria la cooperación internacional para apoyar la transición en muchos países en desarrollo, por ejemplo, mediante la creación de capacidades y la transferencia de tecnología.

63. Entre los países que prometieron dedicar al menos el 1 % del producto interno bruto (PIB) y gastaron al menos el 30 % de los fondos de recuperación de forma compatible con el medio ambiente se encuentran algunos países europeos, así como el Canadá y la República Dominicana. En 2020, la mayor parte del gasto en recuperación verde se destinó a nuevos transportes e infraestructura eléctricos y que utilizan hidrógeno como combustible, transporte público, infraestructura y suministros de energía bajos en carbono, mejoras de edificios en pro de la eficiencia energética, e investigación y desarrollo verdes para descarbonizar la aviación, los plásticos, la agricultura y el secuestro de carbono. Estos planes de estímulo financiero a gran escala muestran la viabilidad de subsanar las deficiencias restantes en relación con la promesa incumplida de destinar 100.000 millones de dólares al año a la financiación climática para los países en desarrollo. Los planes de estímulo de 2020 representaban el 23 % del PIB en las economías avanzadas y el 11 % del PIB en las economías emergentes y los países en desarrollo.

64. Los últimos datos sobre las políticas de gasto público en las 50 mayores economías del mundo muestran que, de un total de 18,2 billones de dólares invertidos para hacer frente a la crisis de COVID-19 hasta finales de 2021, solo 3,1 billones se destinaron a medidas de recuperación a largo plazo. De esos fondos, el 31 % (970.000 millones), se consideraban gasto “verde” o compatible con el medio ambiente. Aunque esto representa solo el 5 % del estímulo total del compromiso con los planes de recuperación verde, la proporción de la financiación verde en las medidas de recuperación aumentó del 18 % en 2020 al 51 % en 2021, ya que se incorporaron a los presupuestos públicos nuevas iniciativas con plazos más largos.

65. En resumen, aunque la pandemia provocó niveles incalculables de sufrimiento humano y creó nuevos retos en la consecución de los Objetivos, también demostró que los Gobiernos pueden cambiar rápidamente su política cuando así lo deciden. Ahora se necesitan cambios rápidos similares para avanzar en la consecución de los Objetivos, incluyendo reformas radicales en los sistemas fiscales y económicos para reducir las desigualdades y elaborar políticas encaminadas a construir una recuperación sostenible. Los elevados precios de los alimentos y de las materias primas también suponen una oportunidad para que los países resuelvan los problemas de inseguridad energética y alimentaria acelerando la adopción de energías renovables y mejorando la eficiencia del sistema, con el fin de alinearse con los Objetivos y fortalecer la resiliencia al cambio climático.

V. Recomendaciones sobre el camino a seguir

66. Las secciones anteriores ilustran que muchas de las consideraciones que impulsaron las deliberaciones sobre el nuevo orden económico internacional siguen siendo pertinentes hoy en día. Contienen muchas recomendaciones para encarar la apremiante cuestión de cerrar las brechas que existen entre los países y dentro de ellos en el contexto actual de la prolongada pandemia de COVID-19, la guerra en Ucrania y una creciente crisis climática, y con un trasfondo del cambio tecnológico transformador. Esta sección se centra en ciertas recomendaciones para apoyar el fin de la pandemia, la recuperación económica inclusiva, la acción climática y la creación de resiliencia aprovechando los beneficios de la digitalización, las nuevas tecnologías y las ideas y propuestas de la Declaración y el Programa de Acción sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional.

67. El hecho de que la pandemia haya persistido meses después de que se produjeran vacunas de eficacia probada debería servir como una llamada de atención sobre la necesidad de mejorar la colaboración mundial, de crear asociaciones eficaces entre todos los sectores y las partes interesadas, y de avanzar en el cumplimiento del Objetivo 17 permitiendo que las asociaciones de múltiples partes interesadas movilicen y compartan conocimientos, experiencia, tecnologías y recursos financieros en todos los países, pero especialmente en los países en desarrollo. Ante estas crisis superpuestas, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París siguen siendo esenciales para guiar tanto la recuperación como la transformación. Se necesitan acciones multilaterales concertadas para abordar los déficits de financiación, preservar el margen fiscal, resolver situaciones de deudas insostenibles, apoyar una transición climática acelerada y reforzar la resiliencia del sistema comercial.

68. Una mayor fortaleza y ambición en la cooperación internacional es un imperativo en la tarea de luchar contra la pandemia, lograr que el mundo vuelva a encarrilarse hacia el logro del desarrollo sostenible y emprender una acción climática enérgica. Existen varios mecanismos y procesos de las Naciones Unidas que apoyan una red de instituciones y organizaciones que tratan de impulsar la aplicación de los Objetivos mediante asociaciones inclusivas. Entre ellos se encuentran el foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible, el foro de asociación del Consejo Económico y Social, el marco de asociación de los pequeños Estados insulares en desarrollo y el Mecanismo de Facilitación de la Tecnología. Los exámenes nacionales voluntarios preparados por los Estados Miembros en relación con su implementación de la Agenda 2030 también pueden servir como vehículos importantes para movilizar el apoyo y las asociaciones de múltiples partes interesadas²¹.

Cumplimiento de los compromisos en relación con la asistencia oficial para el desarrollo

69. Una ralentización del crecimiento económico, así como el aumento del gasto en ayuda humanitaria y militar, pueden desviar recursos de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) y de otras formas de asistencia y amenazar la alianza mundial para el desarrollo. Existe el riesgo de que los países donantes del Comité de Asistencia para el Desarrollo se alejen de sus compromisos en materia de asistencia oficial para el desarrollo (AOD) sobre las necesidades de desarrollo y de la acción climática urgentes. El desvío de recursos en los países desarrollados de la AOD, así como de las transformaciones necesarias de los sistemas alimentarios y energéticos, aumentaría la magnitud de los impactos adversos. El aumento de los precios de los alimentos y la energía amenaza con desviar el gasto público de áreas cruciales para el progreso de los Objetivos, como la protección social, la atención sanitaria, la educación y la infraestructura. Por lo tanto, es fundamental que los donantes cumplan sus compromisos en materia de asistencia oficial para el desarrollo (AOD), especialmente con los países menos adelantados.

70. Es necesario replantear los criterios de asignación de los recursos financieros para aumentar la resiliencia, incluso abordando las limitaciones estructurales en la forma de asignar los recursos. Los asociados para el desarrollo también deberían convertir la ayuda y los compromisos o promesas en materia climática en beneficios para los países menos desarrollados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, incluso considerando las vulnerabilidades multidimensionales como criterio para acceder a la AOD. El aumento de los recursos de los bancos multilaterales de desarrollo puede ayudar a satisfacer las elevadas demandas. Los préstamos de los

²¹ Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, “Transformational partnerships and partnership platforms”, nota de políticas núm. 103, 30 de abril de 2022.

bancos multilaterales de desarrollo aumentaron significativamente en 2020, y se espera un mayor crecimiento en 2021. Mientras que los países menos adelantados se benefician de los recursos concedidos de los bancos multilaterales de desarrollo, las ventanillas no concesionales de estos bancos proporcionan un canal para que los países de ingresos medianos accedan a la financiación a largo plazo a tipos más atractivos que los de sus propios préstamos de mercado.

71. Las iniciativas de cooperación Sur-Sur también han contribuido a la lucha contra la pandemia, ya que han complementado los esfuerzos Norte-Sur y han seguido creciendo en alcance, volumen y ámbito geográfico. Los proveedores de los países del Sur deberían seguir impulsando esta cooperación, incluso a través de la cooperación triangular.

Sostenimiento del margen fiscal y abordaje de los retos de financiación

72. Los Gobiernos, aunque dispongan de poco margen de maniobra fiscal, deben proporcionar apoyo específico para aliviar los efectos del alza de los precios de los alimentos y el combustible en los segmentos más pobres de la población, al tiempo que procuran la sostenibilidad fiscal y de la deuda. Para ello habrá que reestructurar ampliamente y aliviar la deuda de los países más pobres, en particular de los menos adelantados.

73. Se ha pedido a la comunidad internacional que adopte medidas urgentes para hacer frente a los déficits de financiación, el aumento a los costos de los préstamos y el incremento de los riesgos de la deuda. Es necesario aumentar la financiación pública para invertir en las prioridades de las políticas públicas y gastar los recursos movilizados en los Objetivos y en las inversiones productivas de forma eficaz. Las instituciones financieras internacionales deberían considerar la posibilidad de reducir los costos de los préstamos de fuentes comerciales y el sobreendeudamiento, con el fin de reducir la carga de la deuda. Hay que abordar el cambio climático y las desigualdades para transformar positivamente las perspectivas económicas de las generaciones actuales y futuras. Nos comprometemos a mejorar la transparencia y a construir un ecosistema de información más completo con el fin de reforzar la capacidad de los países para gestionar los riesgos y utilizar los recursos de forma eficiente y en consonancia con el desarrollo sostenible.

74. En agosto de 2021, el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció la asignación de 650.000 millones de dólares, el mayor aumento registrado en derechos especiales de giro, que se asignarán en proporción a las cuotas nacionales existentes. El Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad ha sido creado en el marco del FMI para apoyar la recanalización de los derechos especiales de giro de forma voluntaria a los países que más lo necesitan. El inicio de las operaciones del Fondo de manera expedita ayudaría a satisfacer algunas de las necesidades urgentes de los países altamente endeudados y de ingreso bajo.

Intensificación de los esfuerzos para hacer frente a los retos de la deuda soberana

75. Del mismo modo, el G20, en cooperación con el Club de París, inició los esfuerzos para prestar asistencia a través del Marco Común para el Tratamiento de la Deuda con el fin de apoyar a los países con niveles insostenibles de deuda. Los bancos multilaterales de desarrollo también aumentaron sus compromisos financieros en un 39 %, hasta alcanzar unos 145.000 millones de dólares en 2020, de los cuales el Banco Mundial aportó aproximadamente la mitad²².

²² Nancy Lee y Rakan Aboneaj, "MDBs to the rescue? The evidence on COVID-19 response", Center for Global Development, 21 de mayo de 2021.

76. Mientras que el 60 % de los países menos adelantados y otros países de ingreso bajo ya corren un alto riesgo de sufrir sobreendeudamiento o están en dificultades de endeudamiento, la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda del G20 ha ayudado hasta ahora a financiar la respuesta a la pandemia y a limitar el número de países con sobreendeudamiento. Sin embargo, se necesitarán esfuerzos adicionales para cerrar la gran brecha de recuperación. La comunidad internacional también debe redoblar sus esfuerzos para hacer frente a los retos de la deuda soberana.

Financiación de la transición ecológica

77. Los países en desarrollo, que son los que menos han contribuido al calentamiento global, son los que más lo están sufriendo y los daños son cada vez mayores. Los países desarrollados deben intensificar su apoyo a los países en desarrollo a fin de ayudarles a superar el curso tradicional del desarrollo y hacer la transición hacia vías energéticas limpias y sostenibles. Para ello habrá que aumentar considerablemente las inversiones públicas en infraestructura física y social, adaptación climática y mitigación. Los asociados para el desarrollo deberían cumplir el nuevo compromiso de duplicar para 2025 la financiación para la adaptación y dar prioridad a la financiación de subvenciones para los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo. Con miras a lograr una transición justa habría que invertir del orden de 5.700 billones de dólares al año hasta 2030 y redirigir de los combustibles fósiles a la transición energética 0,7 billones de dólares al año en inversiones. Invertir en la transición podría crear 85 millones de puestos de empleo a nivel mundial en renovables y otras tecnologías relacionadas con la transición para 2030. Se prevé que con aumento de los puestos de empleo compense la desaparición de puestos en el sector de los combustibles fósiles²³. Los fondos procedentes de los bancos públicos de desarrollo podrían ayudar a los países en desarrollo a emitir bonos en apoyo de proyectos marinos y pesqueros sostenibles (como los bonos azules de Seychelles) y a establecer la conservación de la biodiversidad como beneficio secundario de otros productos emitidos por los Gobiernos (por ejemplo, el canje de deuda por medidas de protección ambiental)²⁴.

Reducción de las brechas tecnológicas

78. Los países en desarrollo necesitarán tener acceso a varias tecnologías nuevas y disponer de ellas para poder competir en un panorama tecnológico cada vez más complejo. Los canales eficaces para la transferencia de tecnología, la creación de capacidades y la ayuda a la investigación y el desarrollo son de gran importancia. Como se puede ver en el nuevo orden económico internacional, esto implica reforzar la asistencia internacional y crear nuevas reglas para la generación, difusión y adopción de nuevas tecnologías. También es necesaria una protección armonizada de los derechos de propiedad intelectual para crear condiciones equitativas y facilitar la transferencia y difusión efectivas de la tecnología, especialmente respecto de la transferencia de tecnologías que son fundamentales para el desarrollo sostenible. Un régimen de derechos de propiedad intelectual más orientado al desarrollo y flexible que fomente la rápida difusión de tecnologías específicas podría ayudar a cerrar la brecha tecnológica.

79. El Acuerdo de París destaca explícitamente que el desarrollo y la transferencia de tecnología son fundamentales para mejorar la resiliencia frente al cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque se han conseguido algunos éxitos en la transferencia de tecnología a unos pocos países en desarrollo, es

²³ Agencia Internacional de Energías Renovables, *World Energy Transitions Outlook 2022: 1.5°C Pathway* (Abu Dabi, 2022).

²⁴ *Financing for Sustainable Development Report 2022*.

necesario potenciar la adopción de tecnologías de bajas emisiones de forma más amplia en dichos países. La cooperación internacional centrada en la transferencia de tecnología, la creación de capacidades y la financiación podría ayudar a los países en desarrollo a dar un salto hacia la adopción de tecnologías con bajas emisiones de carbono. Además, las transformaciones ecológica y digital se producen al mismo tiempo y están estrechamente relacionadas. La brecha digital existente y la falta de una adecuada gobernanza de la revolución digital podrían obstaculizar el papel que desempeña la digitalización en una transición ecológica. Por tanto, la cooperación internacional para cerrar tanto la brecha verde como la digital es fundamental para la acción climática.
